L

as empresas industriales se ubican, por tradición, donde no impacten a la población. Durante 7 décadas, las industrias de El Muña en Sibaté y Santa Ana, en Soacha, Cundinamarca, han propiciado la consolidación de actividades productivas, aunque no cuentan con la infraestructura básica: red pública de alcantarillado.

Las inversiones han sido significativas, a pesar de no contar con la seguridad jurídica que les permita mejorar con mayor agilidad sus desarrollos: no se han revisado ni ajustado los POT. Inversiones en tecnología, infraestructura, formación y vinculación del talento humano local y regional.

Aun así, cumpliendo parámetros exigidos por la autoridad ambiental CAR, cada una de nuestras empresas no puede seguir vertiendo sus aguas tratadas a los canales abiertos, sino que debe contenerlos y transportarlos; o, bien, no generarlos o conducirlos a las fuentes primarias: ríos y quebradas, para que luego sean devueltos al embalse, donde se mezclan con los efluentes de 27 municipios de la cuenca madre del río Bogotá, pues la opción de conectarse y entregarlos a la red de alcantarillado, como lo manda la norma de marras, no es opción en este territorio.

Desalienta que tanto esfuerzo en mejora de las condiciones de vida de estas zonas industriales, por parte del sector privado, se tienda a convertir en norma de intervención del falso estado de bienestar que venden los mandatarios, pues desconocen que constitucionalmente quien provee el acueducto debe proveer el alcantarillado: letra muerta. Los tributos que pagan estas empresas a los municipios son la caja de su operación, la cual no es retornada en la infraestructura mínima para poder operar: conectividad, comunicaciones, acceso, seguridad, SPD, entre otros, y allí queda truncado el *empresarismo*.

La sostenibilidad de estas actividades está en peligro, pues se ciernen sobre las empresas los actos sancionatorios que conllevan multas y cierres, que degenerarán en la pérdida del empleo digno, sin olvidar la crisis social por no poder interactuar en la ley de compra y venta de bienes y servicios. Ya está ocurriendo la desindustrialización y con la mutación de las actividades industriales a de servicios, se convierten en meros intermediarios comerciales; los entes territoriales se quedarán sin los recursos para sus planes de desarrollo. Todos perdemos por falta de sentido común y por ignorancia supina de cómo abordar los temas transversales.

Este es un llamado a la sensatez de los tomadores de decisión. Continuaremos dispuestos a seguir ofreciendo los acompañamientos técnicos, estudios, etc., pero el Estado debe liderar institucionalmente los proyectos de mejora para la trillada competitividad.

*Walter Ocampo Gutiérrez[[1]](#footnote-1)*

1. Director Ejecutivo ASOMUÑA ([www.asomuna.org](http://www.asomuna.org)) Miembro del Grupo de Estudios en Responsabilidad Social, Ética y Gobierno Corporativo -GERSEGOC [↑](#footnote-ref-1)